

autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

El C. Juez de Distrito de Sonora, así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.*—Asistencia.—*P. del Rincon.*—Asistencia.—*Pastor Rodriguez.*

Es copia de su original que certifico. Guaymas, 1º de Diciembre de 1873.—*D. Elias G.*—Asistencia.—*P. del Rincon.*—Asistencia.—*Pastor Rodriguez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 4 de Febrero de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. coronel del 15º Batallon de línea C. José María Rangel, ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra el acto del C. Administrador de Rentas del Estado, que le exige una cantidad proporcional al impuesto que decretó el Gobierno del mismo Estado facultado por su Legislatura, con cuyo acto reputa el quejoso violadas en su persona las garantías que otorga la Carta fundamental de la República, en sus artículos 4, 14 y 72 en la fraccion XI. Visto el informe de la autoridad responsable, en que se limita á expresar, que la razon del impuesto fué para atender á los gastos de sofocar la sublevacion que apareció en Alamos; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el quejoso y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; y considerando: que el coronel José María Rangel, estando como está en servicio activo, no tiene residencia fija, y que perteneciendo el Batallon número 15 de línea de que es Gefe el quejoso, á las fuerzas de la Federacion, al hacer estensivas á los empleados federales las contribuciones del Estado, se invade por estas autoridades la esfera de las de la Federacion.

Con fundamento del artículo 12 en su fraccion XI, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior,

que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. coronel José María Rangel, contra la exaccion de la cantidad de cincuenta y siete pesos en que fué cuotizado, para satisfacer el impuesto decretado en 6 de Octubre del año próximo pasado.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Oastañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Febrero de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por Dª Dominga Albores, contra la prision á que fué condenada por el C. Juez de 1ª instancia del Departamento de Chiapas, por haber inhumado sin la licencia que previene el Código civil vigente en el Estado, el cadáver de su sobrina María Josefa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que por el ocuro de 4 de Diciembre que acaba de pasar, Dª Dominga Albores, vecina de la Ciudad de Chiapas, se ha presentado pidiendo el

amparo y proteccion de la justicia federal, contra los procedimientos del C. Juez de 1ª instancia de aquel departamento, que á consecuencia de la averiguacion que formó sobre la inhumacion sin licencia de la autoridad competente, de su sobrina Dª Josefa Albores, y solo si con conocimiento de la Gefatura política del lugar, para que la velasen en el Templo; la cual en union de otras asistieron á la traslacion del cadáver, que públicamente se hizo de éste al panteon de San Sebastian, la redujo á formal prision con fecha 2 del citado mes, concluye en consecuencia, que con este proceder se han violado en su persona las garantías que le conceden los artículos 14 y 18 de la Constitución federal. Para probar su acerto, la quejosa hace resaltar en su apoyo las razones, de que el delito que se le imputa, si puede llamarse tal, es de tal naturaleza, que por él nunca merecia pena corporal, sino un arresto ó multa; y que los Códigos civil y penal que entre nosotros rigen, aunque se han adoptado por un decreto de la legislatura del Estado y sancionado por el Ejecutivo, no se han promulgado en el lugar de su residencia, para que como una verdadera ley pudiera surtir sus efectos sin contradiccion alguna.

Pedido el informe con justificacion á la autoridad ejecutora del acto, manifestó en el que ha dado: que los Códigos referidos, para su observancia, se han dado todos los requisitos legales; y que la pena de arresto de que habla el artículo 881 del Código penal, que es el que tuvo presente para sus operaciones, es una pena corporal, pudiendo en consecuencia decretar el auto de formal prision que dictó contra la Señora Albores, sosteniendo á la vez, que con sus providencias no ha violado ninguna de las garantías individuales que aquella evoca.

Para apreciar debidamente el fundamento en que se apoyan las razones del referido Juez y la promovente, preciso es traer á la vista, las doctrinas y disposiciones que puedan guiarnos en el asunto. El artículo

TOMO V.—PARTE II.

18 de la Carta fundamental, dando por sentado que los Códigos penal y civil rigen legalmente entre nosotros, como lo entiende el fiscal, pues que con su adoptacion, reimpresion y publicacion, nada les falta para que figuren como leyes en el Estado, "solo habrá lugar á prision por delito que merezca pena corporal;" de consiguiente, en todo delito que no se puede imponer esta pena, no habrá lugar á la prision, y menos á decretar el auto que la motive. El expresado artículo 881 del Código penal, previene terminantemente, que el que sepulte un cadáver sin la competente autorizacion de la autoridad que deba darla, merece arresto ó multa; por manera, que en un caso dado, si el trasgresor escoje esta última, ni mérito debe hacerse de la primera, y menos puede decirse que en semejante caso pudiera decretarse el auto de formal prision, solo por que alguien juzgue este arresto como una pena corporal, pues se ve que con sola la designacion de la multa que hace el rco, queda eliminado el arresto de que habla el precitado artículo. El 124 del mismo Código explica: que el arresto menor dura de tres á treinta dias, y el mayor de uno á once meses, y que cuando por la acumulacion de dos penas esceda de este tiempo, se convertirá en *prision*, deduciéndose lógicamente de esto, que no es lo mismo arresto que prision, máxime si se ve que el primero, por el artículo siguiente 125, deberá hacerse efectivo en establecimiento distinto de los destinados para la última, que es la cárcel pública como destinada á los presos.

Observada esta palpable diferencia, veremos si el arresto puede calificarse como una pena corporal. Varios y respetables Autores y en particular el Sr. Escriche, en su Diccionario de Legislacion, no cuenta este castigo como pena corporal, sino es cuando pasa de cierto y determinado tiempo, que unos lo han circunscrito á cuatro meses, otros á seis y últimamente por el artículo 124 del Código penal, á once meses; pasados los cuales, dice, llega á ser prision, fun-

dados á no dudar, en el principio generalmente recibido entre ellos, de que la calidad de esta pena no es considerada por su misma esencia, es decir, por la reclusion misma que se sufre; pues á ser así, el arresto de un solo día sería pena corporal, sino del tiempo de su duración; y en este sentido es indudable que el arresto de que habla el artículo 881 del Código tantas veces citado, no es una pena corporal, y de consiguiente no se debió haber dictado el auto de bien preso contra D^a Dominga Albores.

El Juez informante ha dejado traslucir en su informe, que resultan indicios de criminalidad contra esta; y si bien el artículo 16 de la ley general de 31 de Julio de 1859, prescribe, que el que sepulte un cadáver sin conocimiento de la autoridad, se vuelve por ese solo hecho sospechoso de homicidio y digno de que se le sujete á un juicio; en el presente caso no tienen aplicacion, tanto por que ya se halla reformado por dicho artículo 881, como por que el entierro fué público con asistencia de las autoridades, con licencia de la Jefatura política para la velacion del cadáver en el Templo, y probada la enfermedad y causa del fallecimiento con el atestado del facultativo, D. Bernardo Cuesi, que corre agregado en el expediente.

Con tales fundamentos, esta Promotoría cree pedir en justicia, que el Juzgado de su digno cargo se sirva amparar á la peticionaria D^a Dominga Albores, contra los efectos que le ha producido el auto dictado en su contra por el C. Juez de 1^a instancia del Departamento de Chiapas, con fecha 2 de Diciembre próximo pasado, por la inhumación sin licencia del cadáver de su sobrina D^a Josefa Albores, que tuvo lugar el día 11 de Noviembre también último.

San Cristóbal L. C. Enero 3 de 1874.—Firmado.—*Carlos Ballinas.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Cristóbal Las Casas, 13 de Enero de 1874.—Visto en todos sus detalles el presente juicio de proteccion y amparo, interpuesto en 4 de Diciembre último por Dominga Albores del vecindario de la Ciudad de Chiapa, cabecera del Departamento del mismo nombre, pretendiendo estar violadas en su persona las garantías de que tratan los artículos 14 y 18 de la Constitucion general de la República, en virtud de haber sido declarada en 2 del propio mes, formalmente presa por el Juez de 1^a instancia de dicho Departamento, á causa de haber mandado dar sepultura al cadáver de su sobrina María Josefa, en el panteon de San Sebastian, sin licencia de la autoridad competente, como está prevenido en el artículo 135 del Código civil, decretado para el Distrito federal y territorio de la Baja California y adoptado para el Estado por decreto de 17 de Noviembre de 1871, y cuya falta debe ser castigada con la pena de arresto ó multa, segun el artículo 881 del Código penal, decretado igualmente para el Distrito federal y para el territorio de la Baja California, y adoptado así mismo en el Estado, por decreto de 11 de Diciembre de 1872.

Considerando primero: que si el hecho porque se ha declarado formalmente presa á la quejosa, no mereciera en su caso otra pena que la de arresto ó de multa; no siendo tales penas corporales, pues no están comprendidas entre las que como tales, tiene clasificadas el derecho, el auto de formal prision decretado contra ella, es indudable que vulnera la garantía de que trata la primera parte del artículo 18 constitucional.

Considerando segundo: que siendo como es igualmente cierto, que conforme al artículo 14, nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él, no existiendo en el proceder del Juez contra quien se ha promovido este recurso, la

exactitud así reclamada, como se comprueba con la violación del artículo 18 citado, es así mismo cierto que lo está el propio artículo 14.

Considerando tercero: que aunque se objeta de parte de la quejosa, que el Código civil no está promulgado en el Estado, no es esto exacto, así por ser lo contrario de pública notoriedad, como por que á ser cierto lo que en tal respecto expresa ella misma, no lo invocara como lo invoca.

Con fundamento de lo expuesto, y de las prescripciones de la ley de 20 de Enero de 1869, y de acuerdo con lo pedido en el dictámen fiscal correspondiente, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Dominga Albores contra el auto de formal prision que le decretó en 2 de Diciembre del año próximo pasado, el Juez de 1ª instancia del Departamento de Chiapa.

Hágase saber; librense las copias de estilo para su publicación, y dese cuenta en revisión con estos autos á la Corte Suprema de Justicia.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito propietario del Estado, ante el escribano del despacho que certifica.—Firmados.—*Juan J. Ramirez.—J. Crisóstomo Lara.*

Son copias que certifico. San Cristobal Las Casas, 14 de Enero de 1874.—*J. Crisóstomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Doña Dominga Albores, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Chiapas, contra la prision á que fué condenada por el Juez de 1ª instancia del Departamento de Chiapa, con violación de los artículos 14 y 18 de la Constitución federal, por haber inhumado sin la licencia que previene el Código civil vigente en el Estado, el cadáver de su sobrina Ma-

ría Josefa; visto el informe del Juez responsable; el parecer fiscal; el fallo del Juez de Distrito, y

Considerando: que si bien es cierto que la Albores estaba obligada segun el Código vigente del Estado, á pedir licencia á la autoridad encargada del Registro civil, la pena con que en dicha ley está sancionada tal disposición, no es forzosamente la del arresto sino en defecto del pago de la multa; que no ha habido en consecuencia aplicacion exacta de la ley, y se ha castigado con pena corporal un delito para el que señala la ley una multa, con este procedimiento han sido violadas en perjuicio de la quejosa las garantías consignadas en la 2ª parte del artículo 14 y en la 1ª del artículo 18 de la Constitución federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que ampara y protege á Dª Dominga Albores, contra los procedimientos del Juez de 1ª instancia del partido de Chiapa.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.—J. José de la Garza.—J. M. Lozano.—I. Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—J. García Ramirez.—E. Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 13 de 1873.—*E. Landa,* oficial mayor.